

Nº - - - - 039

17 ENE 2024

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ de fecha _____

Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022, adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el Decreto 507 del 06 de noviembre de 2013, en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Bogotá, mediante Resolución No. 41 del 10 de Enero de 2023, decidió imponer sanción a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S SEDE SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA, identificada con NIT No.800.251.440-6 y Código de Prestador (Sede) 1100124826-16, ubicada en la Calle 14 No. 62-04 y Carrera 62 No.14- 41: con dirección para efectos de notificación judicial en la AC 100 No.11 B 95 de la ciudad de Bogotá DC o al correo electrónico judicial: notificajudiciales@keralty.com/paucalderon@keralty.com; en cabeza de su Representante Legal o quien haga sus veces, con multa pecuniaria de: CUATRO (4) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AÑO 2023, equivalentes a la suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.640.000.00) conforme al Literal b) del Artículo 577 de la Ley de 1979, modificado por el artículo 98 del Decreto 2106 de 2019, por violación a las siguientes normas: Decreto 780 de 2016, Capítulo 2, Artículo 2.5.1.2.1 Características del SOGCS, Numeral 3 (Seguridad), en concordancia jurídica Artículo 3° Numeral 3.8 de la Ley 1438 de 2011 y la Ley 100 de 1993 Artículo 185 (CARGO 1): Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.3.2.1 "Condiciones de Capacidad Tecnológica Científica", Resolución 2003 de 2014 (vigente para la época de los hechos). Artículo 3 Numeral 3.3 "Capacidad Tecnológica y Científica, y su "Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud", Numeral 2. Condiciones de Habilitación Numeral 2.3. Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica, Numeral 2.3.1 Estándares de Habilitación; Numeral 2.3.2, Estándares y Criterios de Habilitación por Servicios (Servicio de Urgencias), en algunos de los Criterios del Estándar de Historia Clínica y Registros, en concordancia con la Resolución 1995 de 1999, Artículos 3° (Racionalidad Científica) 4 (Obligatoriedad de Registro) y 20° (Funciones del Comité de Historias Clínicas) (CARGO 2); de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo".

La precitada resolución sancionatoria fue notificada a la institución investigada el día 17 de Enero de 2023 a través de comunicación electrónica, quien a través de su apoderada y estando dentro del

202

10-000-039

17 ENE 2024

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

término legalmente establecido presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión de primera instancia mediante correo electrónico de fecha 26 de Enero de 2023.

Igualmente, la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C a través de la Resolución No. 899 del 26 de abril de 2023, resolvió el recurso de reposición, decidiendo no reponer la resolución sancionatoria y en consecuencia confirmarla, al tiempo que concedió el recurso de apelación remitiendo las actuaciones ante el inmediato superior.

ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS

Argumenta la apoderada de la Institución investigada lo siguiente:

"Nótese que si bien se cita el marco normativo aplicable al caso concreto, el operador jurídico no hace el más mínimo análisis para establecer cómo la sanción impuesta, cumple con los principios de proporcionalidad ni razonabilidad, frente al reproche formulado. Nada indica sobre la existencia de atenuantes, y especialmente, omite realizar un análisis siquiera sumario, sobre el daño o peligro de los intereses jurídicamente tutelados en el caso concreto, la inexistencia de reincidencia en la conducta del investigado (que en este caso no existe) y la colaboración prestada a la SDS desde la misma indagación preliminar. Así las cosas, es claro que no se dio aplicación al principio de proporcionalidad de la sanción, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional: "Para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración se requiere: (1) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso".

Así las cosas, la multa impuesta no es coherente y resulta desproporcionada habida cuenta del marco factico que generó la investigación.

1. PETICIONES

PETICIÓN PRINCIPAL

Solicito al Honorable Despacho se sirva dar trámite al recurso acá sustentado **REPONIENDO** y por lo tanto **REVOCANDO** en su al principio de proporcionalidad de integridad la **RESOLUCIÓN 41** de 2023, por no adecuarse la sanción Como consecuencia se solicita **TERMINAR** el procedimiento administrativo y definitivamente la Investigación N° 11012022. **ARCHIVAR**

PETICIÓN SUBSIDIARIA

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha **17 ENE 2024** "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud."

En caso de no reponer la Resolución acá atacada, solicito se de trámite de forma subsidiaria recurso de APELACIÓN con el fin de que sea el superior jerárquico quien entre a decidir la atrada, de acuerdo con lo ya expuesto."

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos, de manera que se garantice el acceso a procesos justos y adecuados; el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; los principios de contradicción e imparcialidad; y los derechos fundamentales de los asociados.

Así mismo, recordemos que dentro de las responsabilidades del estado Colombiano está la de proteger la vida, los derechos a la seguridad social y la salud de todas las personas residentes en Colombia e igualmente tiene a su cargo la organización, dirección y reglamentación de los servicios públicos de atención de la salud, saneamiento ambiental y ejercer la vigilancia y control de la prestación de servicios de salud. Es su deber constitucional, así como legal el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad; por su parte la Secretaria Distrital de Salud tiene el deber de implementar mecanismos de seguimiento que permitan establecer los atributos de la calidad en la atención en salud, a través de las quejas, peticiones, reclamos e inquietudes de los usuarios afiliados al sistema General de Seguridad Social de Salud, sin tener en cuenta las diferencias sociales.

La presente actuación administrativa sancionatoria obrante bajo el radicado No. 1101 2022 se apertura con ocasión a la queja radicada por parte de la señora KATHERYNNE ASTRID CORREDOR LOAIZA mediante Canal de Recepción correo electrónico el día 12 de Diciembre de 2019 quien puso en conocimiento las irregularidades relacionadas con la atención recibida en la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA EPS SANITAS UNIDAD URGENCIAS PUENTE ARANDA, institución a la que acudió el día 09 de Diciembre de 2019 ya que presentaba síntomas agudos de Migraña con la presencia de "vómito y luces" y en su escrito de queja manifestó que tuvo que esperar cerca de 4 a 5 horas en sala de urgencias para que le dieran "información que no requería" e incapacidad médica, sin ser realmente valorada de acuerdo a los signos de alarma que presentaba razones por las cuales presentó queja por "mala atención y falta de ética médica".

El Despacho verifica que en el caso que nos ocupa se le han brindado las garantías constitucionales y legales al debido proceso, defensa y contradicción a la institución investigada, como quiera que desde el 10 de Mayo de 2022 se comunicó del adelantamiento de la investigación preliminar, así

17 ENE 2023

Continuación de la Resolución No. 039 de fecha 17 ENE 2023 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud."

mismo, le fueron debidamente notificados los autos No. 4531 del 20 de Mayo de 2022 comunicando la formulación del pliego de cargos con la posibilidad de presentación de descargos, solicitar y/o aportar pruebas, ante lo cual la investigada aportó los descargos; en igual sentido el auto No. 6932 del 06 Octubre de 2022 notificando a la investigada de la posibilidad de presentar alegatos de conclusión ante lo cual la misma presentó sus respectivas alegaciones finales y finalmente se le notifico de la decisión de primera instancia objeto de los recursos ya citados.

No es desconocido por esta instancia que toda investigación preliminar tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta desplegada por el presunto infractor, determinar si es constitutiva de falta contra las normas en la prestación de servicios, establecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se incurrió, el perjuicio causado a los usuarios y la responsabilidad a que haya lugar en cabeza del representante legal o propietario del establecimiento de comercio.

Se hace necesario recordar a la institución investigada que cuando se imputa responsabilidad a una persona natural o jurídica en pliego de cargos se habla de responsabilidad presunta, que como tal puede desvirtuar el presunto responsable en ejercicio del derecho de contradicción y defensa que le garantiza la Constitución Política y todo el ordenamiento jurídico, por ende podrá presentar los medios de prueba que considere pertinentes y útiles para tal efecto, así las cosas, se considera de importancia resaltar que revisando las actuaciones surtidas al interior del presente procedimiento administrativo sancionatorio, la institución investigada aportó pruebas en la oportunidad procesal correspondiente tendientes a desvirtuar los cargos elevados en su contra, ya que allego escrito de descargos dentro del término legalmente establecido, sin embargo, el contenido documental llevó a esta autoridad en el trámite de primera instancia a corroborar las infracciones atribuidas en la presente investigación administrativa sancionatoria.

El artículo 167 del Código General del proceso a cuyas normas nos remite la Ley 1437 de 2011, establece en cuanto a la carga de la prueba, que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, es decir, que quien pregone un supuesto de hecho como medio defensivo, debe allegar los elementos materiales probatorios que lo sustenten, y como se dijo con antelación, a pesar que la defensa solicita la exoneración del prestador de servicios de salud investigado, son irrefutables los hallazgos en relación con los cargos objeto de la presente, no obstante esta instancia atendiendo a los principios de legalidad y debido proceso respecto del presente proceso administrativo sancionatorio, analizará y se referirá a los argumentos contenidos en el recurso de alzada, los cuales fueron transcritos en el acápite anterior.

En virtud del contenido del Concepto Técnico Científico obrante a folios 7 a 9 del expediente efectuada por profesional médico especializado de la Subdirección, Inspección, Vigilancia y Control

039

17 ENE 2024

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

de Servicios de Salud, en este sentido se llega a la conclusión de la infracción a la normatividad antes citada por parte de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S SEDE SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA, ya que se evidenció que no se garantizó la Característica de Calidad: Seguridad como se conceptuó en los siguientes términos:

"CONCEPTO: Una vez revisada la queja y la documentación que reposa en el expediente con Radicación 293536/2019 relacionado con la paciente KATHERYNNE ASTRID CORREDOR LOAIZA quien fue atendida en la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA y de acuerdo con lo expresado en el Análisis de la información, se puede conceptuar que en la atención en Salud brindada no se Garantizó la Característica de la Calidad en Salud: Seguridad, por la identificación de atención insegura Tipo 2 en relación a la omisión de realización de Atención Inicial de Urgencias y Tipo 3 en relación a fallas activas en la calidad y completitud de los registros clínicos, de acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente, por lo que se considera hubo presuntas fallas Institucionales.

De acuerdo con el Manual único de Habilitación, se encontró incumplimiento del Estándar de Procesos Prioritarios y del Estándar de Historia Clínica y Registros dados los hallazgos en relación a estos."

De acuerdo con las pruebas documentales allegadas al proceso, considera este Despacho que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa sancionatoria atribuible a la institución investigada por la infracción a la normatividad que comporta el cargo elevado en su contra, por cuanto en la atención brindada a la señora KATHERYNNE ASTRID CORREDOR LOAIZA se evidenció una atención insegura Tipo 2 por omisión de la atención inicial de urgencias aunado a la falta de completitud en los registros clínicos configurándose así fallas institucionales e incumplimiento al estándar de Procesos Prioritarios y Estándar de Historia Clínica y Registros (Folio 8).

Este Despacho reitera a la institución Investigada que debe garantizar la prestación de los servicios de salud con todos los atributos de calidad, oportunidad y seguridad, pues como bien sabemos, el servicio de salud es catalogado servicio público y quienes se encuentran autorizados por la ley para prestarlo deben hacerlo en las mejores condiciones, garantizando el cumplimiento de sus fines y los derechos de quienes a él concurren en ejercicio de las garantías establecidas en la constitución y la ley; así las cosas, cuando el mencionado servicio no cumple con el fin o propósito perseguido, se presume su mala operación.

Al respecto, recuérdese que la protección al derecho fundamental a la salud no se limita simplemente al reconocimiento de los servicios que se requieren con necesidad; sino que comprende también su

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud."

acceso de manera oportuna, eficiente y de calidad. La prestación del servicio de salud es oportuna cuando la persona lo recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. En forma similar, el servicio de salud se considera eficiente cuando los trámites administrativos a los que se somete al paciente para acceder a una prestación requerida son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir.

Por todo lo expuesto para concluir que no existen dudas en cuanto a la materialidad de la transgresión atribuida al prestador de servicios de salud investigado en la atención de la señora KATHERYNNE ASTRID CORREDOR LOAIZA pues el contenido de las pruebas documentales, el concepto técnico y la situación fáctica puesta de presente llevan a esta autoridad a corroborar la infracción atribuida mediante la formulación del pliego de cargos y la sanción objeto de apelación evidenciándose que no se garantizó el atributo de calidad: Seguridad aunado al incumplimiento al Manual único de Habilitación en el estándar Procesos Prioritarios y Estándar de Historia Clínica y Registros.

En relación con el escrito de apelación, el argumento presentado por la apoderada de la institución investigada la graduación de la sanción impuesta a la institución investigada se centra en la inconformidad respecto de la multa impuesta, pues en sus términos *"la multa impuesta no es coherente y resulta desproporcionada habida cuenta del marco factico que generó la investigación"*. Frente al argumento de disenso, observa este Despacho que la multa impuesta mediante la Resolución No. 41 del 10 de Enero de 2023, en efecto atiende al juicio de discrecionalidad el cual se soporta sobre los pilares de la proporcionalidad y razonabilidad establecidos por el artículo 44, así como los criterios de graduación de las sanciones artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, en igual sentido el artículo 577 de la Ley 9 de 1979 contenido normativo que establece los límites de las sanción administrativa partiendo de la simple amonestación hasta la multa de 10.000 salarios diarios mínimos legales.

Ahora bien, una vez dilucidado lo anterior y en garantía del debido proceso, este Despacho ha de indicar que la Resolución 2003 de 2014 que ha sido objeto de infracción en la presente investigación, fue derogada por la Resolución 3100 de 2019, lo anterior, resulta de vital importancia como quiera que, si bien es cierto en la fecha en que ocurrieron los hechos, esto es, desde el día 09 de Diciembre de 2019, la Resolución 2003 de 2014, se encontraba vigente, también lo es, que a la fecha de imposición de la sanción ésta había sido derogada; este Despacho ha sostenido que además de la certeza respecto de la ocurrencia de la infracción, así como la individualización del responsable de la falta, la sanción administrativa debe sustentarse en el respeto y garantía de los principios constitucionales, legales y procesales, entre los que se encuentran los principios de legalidad, tipicidad y favorabilidad.

Nº 039

17 JUL 2024

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

El operador jurídico de la norma, debe tener en cuenta el contenido de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 153 de 1887: *"Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería."*, lo anterior en armonía con el 14 de la misma disposición normativa según la cual *"Una ley derogada no revivirá por sí sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva"*. En consonancia con lo anterior la Constitución Política artículo 4 prevé: *"La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales."* Esto en consonancia con lo previsto en el artículo 6 de la misma norma *"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."*

Así mismo, el artículo 29 establece. *"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)".* Al respecto, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C – 713 de 2012, con ponencia del Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, precisó: *"El artículo 29 constitucional dispone que el debido proceso "se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", constituyéndose en la regulación jurídica previa que limita los poderes del Estado y garantiza la protección de los derechos de los administrados, de manera que ninguna de las actuaciones de la autoridad pública dependa de su propio arbitrio, sino se encuentre sometida a los procedimientos establecidos en la ley. Por su parte, el inciso 2 del artículo 29 de la Constitución Política, prescribe que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", todo ello, con el fin de garantizar el debido proceso, dentro del cual se reconoce como pilar fundamental el principio de legalidad.*

Esta Corporación ha señalado que el principio de legalidad exige: *"(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable"* y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.

32

Continuación de la Resolución No. 039 de fecha 17 ENE 2024 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud."

Por su parte, el principio de tipicidad se concreta a través de la descripción completa, clara e inequívoca del precepto - la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción - y de la sanción - la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto y busca que la descripción que haga el legislador sea de tal claridad que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las conductas reprochables, evitando de esta forma que la decisión sobre la consecuencia jurídica de su infracción, pueda ser subjetiva o arbitraria".

Nótese cómo la Corte Constitucional, precisa en relación con el principio de legalidad, que la norma no solo debe estar vigente al momento previo en que se cometió la infracción, es necesario que la misma esté vigente en la fecha en que se impone la sanción. En este sentido, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C, seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación número: 13001-23-31-000-2001-00051-01(AP), también se ha pronunciado así: *"Es así como, la Sala, en vigencia de los arts. 39 y 40 habrían concedido el incentivo, sin embargo, no puede hacerlo ahora, toda vez que a la fecha en que se dicta esta providencia están derogadas las disposiciones que lo autorizaban. Ello supone, dado que se trata de normas de contenido sustantivo, que su aplicación requiere de su vigencia, y por eso debe regir la nueva normativa, no obstante que el proceso se tramitó en vigencia de la ley 472, pero ocurre que no basta esta circunstancia para aplicar su contenido al caso en estudio. En efecto, en la ley 153 de 1887 se respalda esta posición, como quiera que el art. 3 dispone: "Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería", de manera que si perdió vigencia no se puede aplicar. (...)"* Así las cosas, si bien la autoridad administrativa tiene la obligación de investigar el incumplimiento a las disposiciones normativas, también lo es, que su actuar no puede pretender sacrificar injustamente los derechos fundamentales de los investigados y ponerlos en una condición de inseguridad jurídica; imponiendo sanciones fundamentadas en disposiciones regulatorias que han salido del ordenamiento jurídico, y que además desgastan a la administración en un procedimiento que a posteriori va a quedar sin efectos, lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 numeral segundo de la Ley 1437 de 2011 la cual reza: *"Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (...) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. (...)"*

Luego entonces, es incoherente que la autoridad administrativa encargada de aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio, imponga sanciones con disposiciones normativas derogadas, las cuales, al momento de adquirir firmeza, no se puedan ejecutar.

Nº --- - 039

17 ENE 2024

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

El Despacho, respetuoso de las garantías constitucionales y legales en mención, ha de señalar que al proferirse la Resolución No. 41 del 10 de Enero de 2023, se desconoció que la Resolución 2003 de 2014, esto es, una de las normas vulneradas por la institución investigada, esta había sido derogada por la Resolución 3100 de 2019, luego no era procedente imponer la sanción administrativa a la luz de dicho cuerpo normativo. En consecuencia, por el haber desaparecido uno de los fundamentos jurídicos soporte de la sanción, estima esta Instancia Administrativa que lo procedente es atenuar la sanción impuesta, en relación a la vulneración a la Resolución 2003 de 2014, cuando no existe un sustento normativo, legal y debidamente tipificado que respalde no sólo la clasificación de la conducta como falta, sino, además, que establezca los parámetros para imponer la sanción, específicamente en relación a la vulneración de la Resolución 2003 de 2014.

Como corolario de lo expuesto, en atención las consideraciones previas, este Despacho procederá a modificar la sanción impuesta a través de la Resolución impugnada por medio de la cual la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud sancionó a la institución denominada ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S SEDE SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA, identificada con NIT No.800.251.440-6 y Código de Prestador (Sede) 1100124826-16.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 41 del 10 de Enero de 2023, mediante la cual se sancionó a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S SEDE SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA, identificada con NIT No.800.251.440-6 y Código de Prestador (Sede) 1100124826-16, ubicada en la Calle 14 No. 62-04 y Carrera 62 No.14- 41: con dirección para efectos de notificación judicial en la AC 100 No.11 B 95 de la ciudad de Bogotá DC o al correo electrónico judicial: notificajudiciales@keralty.com/paucalderon@keralty.com; en cabeza de su Representante Legal o quien haga sus veces, con multa pecuniaria de: DOS Y MEDIO (2.5) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AÑO 2023, equivalentes a la suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.900.000.00), por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Nº - - - - 039

17 ENE 2024

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022 adelantada por la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del contenido de esta resolución al representante legal de la institución investigada, haciéndole saber que contra la presente decisión no procede recurso alguno.


PARÁGRAFO: Si no fuere posible notificar personalmente dentro del término previsto, deberá hacerse conforme con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO CUARTO: Notificada la presente providencia se ordena devolver el expediente a la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para que continúe con el trámite legal a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá a los _____ 17 ENE 2024


GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD

Elaboró: Angélica Hernández.
Aprobó: B. Rodríguez.


000101

Señor/a/es
REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S SEDE SANITAS
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA

AC 100 No.11 B 95 de la ciudad de Bogotá

Correo electrónico judicial: notificajudiciales@keralty.com/paucalderon@keralty.com**POSTEXPRESS CORREO****ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA**

En atención a lo ordenado por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por este medio se notifica la Resolución por la cual se resuelve un recurso de apelación, dentro de la Investigación Administrativa No. 1101 2022.

Se le advierte que de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 esta notificación se considera surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo.

Cordialmente,

JULIO CESAR LOZANO M.
Profesional Universitario
Oficina de Asuntos Jurídicos

Angélica Hernández

